**LOS ERRORES CUESTAN**

La política fiscal, entendida como el manejo de los ingresos y gastos públicos, es como los rifles de alto calibre: su poder es letal, por lo que si uno no los conoce bien es mejor no tocarlos.

Durante la administración del presidente Peña Nieto, la política fiscal ha sido errática y, por ello, costosa. Al inicio de su gestión frenó el gasto público, quizá por fortalecer las finanzas públicas deterioradas por su antecesor y asimismo por la inexperiencia en el ejercicio del gobierno en ese entonces.

Durante el primer semestre de 2013 el gasto programable se redujo 3.4 por ciento en términos reales, 2 por ciento el gasto corriente y 7.1 por ciento la inversión física directa. Ello ocasionó, en parte, que el crecimiento del PIB disminuyera de 2.2 por ciento en los primeros tres meses de ese año a apenas 0.7 por ciento en el último trimestre.

En 2014, con una economía que se debatía entre la desaceleración y la recesión, se elevaron los impuestos. Esta medida redujo el ingreso disponible de la clase media en aproximadamente 4 por ciento y con ello afectó severamente el poder de compra del segmento que adquiere aproximadamente 40 por ciento de la demanda de bienes y servicios del país. El resultado fue un severo golpe al consumo privado que durante la primera mitad de 2014 creció 1.3 por ciento anual, o sea una tercera parte de su ritmo de avance normal. No en balde el crecimiento del PIB de la primera mitad del año pasado alcanzó apenas 1.7 por ciento, esto es poco más de la mitad de su crecimiento potencial.

Hace unos días, de manera sorpresiva, el gobierno anunció un recorte de 0.7 por ciento del PIB. La medida se justificó por el bajo nivel de los precios del petróleo y, cabe decir, fue bienvenida por un buen número de analistas.

Indudablemente México tiene un gobierno obeso, por lo que adelgazarlo implica una buena acción en favor de la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Sin embargo, la forma y el momento del ajuste de este gasto le van a salir caros al país.

En la forma destaca que la mayor parte del recorte presupuestal afectará la inversión productiva y no el gasto corriente, como se ha tratado de presentar a la opinión pública. El sector petrolero resulta el más afectado por las tijeras hacendarias, que una vez más abusan de Pemex al dejarlo sin recursos suficientes para ejercer sus funciones. Por momentos se olvidan en el Gobierno Federal que el volumen de producción de crudo y otros petrolíferos se ha reducido casi 30 por ciento en la última década, precisamente por la falta de inversión en exploración y extracción y que uno de los objetivos prioritarios de la reforma energética es precisamente restituir la producción perdida en todos estos años.

Por otra parte, en cuanto al momento, la contracción del gasto es anticlimática ya que comenzará a aplicarse justo cuando la economía privada parecía salir avante. En una coyuntura en la que los consumidores no han consolidado la confianza y los recursos para normalizar sus patrones de demanda y en el que las empresas mantienen dudas sobre la conveniencia de invertir para ampliar su capacidad productiva, el gasto público en vez de ser un aliento, como se tenía previsto y anunciado, será un freno.

Si en verdad se cumple el recorte presupuestal es factible que la economía crezca por debajo de su tasa natural por tercer año consecutivo, muy posiblemente 2.8 por ciento en comparación con 3.2 por ciento que se preveía antes del ajuste presupuestal. Este avance es totalmente insuficiente para satisfacer las necesidades laborales y sociales del país.

Es difícil precisar cuanto han costado al país los desaciertos de la política fiscal de los pasados tres años, aunque podría aventurarse que la cifra ronda al menos 1 por ciento del PIB, o sea unos $180 mil millones de pesos. No es poca cosa para un país lleno de carencias.

*Socio de GEA grupo de Economistas y Asociados.*